



La consulta plantea, si resulta excesivo al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la comunicación de los datos solicitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a la consultante.

La transmisión de los datos que refiere la consulta supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal que según dispone el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta disposición se ve complementada en el supuesto que ahora nos ocupa por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica, del cual se desprende que será posible la cesión cuando una Ley lo permita.

Del tenor de la consulta se desprende que la consultante considera que sólo deben comunicarse los datos a los que se hace referencia en el artículo 5.2 de Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias.

Más concretamente el artículo 5 de la citada Ley donde se regulan los principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos, establece que “1.La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos, se rige por los siguientes principios generales:

a) Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta Ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.

b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.

c) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones.

d) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

e) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución.

f) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (RCL 2002, 2650) , Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

2. Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta Ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre,

titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta Ley se determinan como públicos.

Asimismo, podrán existir en los centros sanitarios y en las entidades de seguros que operan en el ramo de la enfermedad, otros registros de profesionales de carácter complementario a los anteriores, que sirvan a los fines indicados en el apartado anterior, conforme a lo previsto en los artículos 8.4 y 43 de esta Ley.

Los criterios generales y requisitos mínimos de estos registros serán establecidos por las Administraciones sanitarias dentro de los principios generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.”

Por su parte el Decreto 427/2008, de 29 de julio por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios de Andalucía determina en el artículo 6.2 que “Tendrán carácter público, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 y 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los siguientes datos de los profesionales sanitarios: nombre, titulación, especialidad lugar de ejercicio y Categoría y función en su caso”

Por tanto, el Decreto de Andalucía siguiendo el mismo criterio que la Ley Estatal, sólo atribuye el carácter público a los datos anteriormente señalados, lo que justifica que la comunicación de dichos datos se ampare en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, en virtud del citado artículo 5.2 de la Ley 44/2003.

Cuestión distinta, es la que aparece regulada en el artículo 11 del Decreto cuestionado, que bajo el título Funciones del Registro, exige que se facilite a los Registros los datos incluidos en el Anexo del mencionado Decreto, no obstante esa inclusión no lleva implícito el carácter público de todos esos datos, sino que recabar dicha información resulta necesario, para que la Consejería de Salud, pueda entre otras cosas como señala el citado artículo 11 “actualizar los datos (..) comprobar la autenticidad de los mismos” .

Esta función se complementa con la obligación que la Ley 44/2003 impone a los centros sanitarios en el artículo 8.3 donde se prevé que “3.Los

centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta Ley y en las demás normas aplicables, entre ellos la titulación y demás diplomas, certificados o credenciales profesionales de los mismos, en orden a determinar la continuidad de la habilitación para seguir prestando servicios de atención al paciente. Los centros dispondrán de un expediente personal de cada profesional, en el que se conservará su documentación y al que el interesado tendrá derecho de acceso.”

En virtud de lo anteriormente señalado, podemos concluir que la información solicitada por la Consejería de Salud Andaluza, se puede comunicar al amparo del artículo 8.3 de la Ley 44/2003 y además cumple con el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Dado que los datos solicitados, tienen como finalidad revisar y actualizar la información en orden a comprobar la habilitación del profesional para seguir prestando servicios de atención al paciente, función esencial que ejercerá la Consejería de Salud de Andalucía a través de sus centros sanitarios.